

C.A. de Temuco

Temuco, catorce de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En los antecedentes RUC 1901072463-8, RIT 116-2022, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, se dictó, con fecha 12 de diciembre de 2022, sentencia definitiva por la cual se condenó, sin costas, al acusado Benjamín Edmundo Toledo Ibarra, a la pena única de OCHOCIENTOS DIECISIETE DÍAS DE RECLUSIÓN MENOR EN SU GRADO MEDIO, a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, a la accesoria especial de suspensión de licencia de conducir por el término de dos años, como autor de sendos cuasidelitos de homicidio, cuasidelito de lesiones graves, menos graves y leves, por el hecho ocurrido el día 4 de abril de 2019, aproximadamente a las 10:40 horas, a la altura del kilómetro 40, de la ruta CH.181 de la comuna de Curacautín, concediéndose además la pena sustitutiva de remisión condicional por el mismo tiempo que dura la condena.

En contra de dicha condena, el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Curacautín, don Iván Isla Amaro, dedujo recurso de nulidad fundado en la causal establecida en el artículo 374 letra e), en relación con los artículos 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal, pidiendo se acoja su recurso, anulándose el juicio oral y la sentencia, disponiéndose la realización de un nuevo juicio, ante el tribunal no inhabilitado que corresponda. Los querellantes don Sergio Eduardo Millamán Manríquez, abogado, por la víctima doña Lilian Rosa Neculhueque Gajardo; don Andrés Eduardo Celedón Baeza, abogado, por la víctima doña Verónica Beatriz Zapata Albornoz y; con René Saffirio Espinoza, abogado, por las víctimas doña María Inés Cifuentes Campos y don Hugo Marcelo Álvarez Figueroa, se adhirieron al recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público, en los términos del artículo 382 del Código Procesal Penal.

En estrados comparecieron el abogado asesor del Ministerio, los



abogados querellantes y el abogado defensor, quienes expusieron sus pretensiones, quedando la causa en acuerdo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se ha interpuesto por el Ministerio Público recurso de nulidad, al cual adhirieron los querellantes antes individualizados, en contra de la sentencia definitiva que condenó, sin costas, al acusado Benjamín Edmundo Toledo Ibarra en calidad de autor de sendos cuasidelitos de homicidio, cuasidelito de lesiones graves, menos graves y leves, por el hecho ocurrido el 4 de octubre de 2019, aproximadamente a las 10:40 horas, a la altura del kilómetro 40 de la ruta CH.181 de la comuna de Curacautín, fundado en la causal de invalidación consagrada en el artículo 374 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, cuando en la sentencia se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e) en relación con el artículo 297 del mismo cuerpo legal.

Sustentan su impugnación, precisando que los jueces, al momento de valorar la prueba, incurren en errores de lógica jurídica, ya que arriban a conclusiones vulnerando el principio de la razón suficiente, al condenar al acusado por sendos cuasidelitos de homicidio, cuasidelito de lesiones graves, menos graves y leves, por estimar que la Fiscalía no pudo acreditar que la conducta del imputado haya sido con dolo eventual y, en razón de aquello, establece que los hechos son constitutivos de delitos culposos, fundada dicha valoración en los medios de prueba incorporados por el persecutor, en particular, de la testimonial rendida en juicio, de la cual, según los sentenciadores, no se puede concluir que el acusado hubiese tomado conocimiento de los reproches que los pasajeros realizaban, motivados por la elevada velocidad a la que se desplazaba el bus.

SEGUNDO: El recurrente reproduce los considerandos noveno y duodécimo de la sentencia impugnada, en donde los jueces se hacen cargo de la teoría del caso de los acusadores y la desechan, fundados en que con la prueba de cargo no se pudo acreditar el hecho de que el



conductor del bus hubiese tomado efectivo conocimiento de los reclamos que efectuaban los diversos pasajeros por la elevada velocidad del bus y, aún así, persistiera en su conducta.

TERCERO: Argumenta el Ministerio Público que, de acuerdo a la regla lógica que estima vulnerada, para que una enunciación sea verdadera, debe haber una razón suficiente, para que así sea y no de otra manera. Debe existir una razón suficiente para llegar a esa premisa y aquello debe provenir de la prueba rendida y analizada por el tribunal. Cita el considerando undécimo, en donde los sentenciadores se refieren a la dinámica de los hechos, y señalan: *“en efecto, es un hecho cierto y concreto que se infiere de los dichos claros y precisos de los testigos presenciales y directos, no controvertidos, que el día 4 de abril de 2019 los alumnos del Liceo Agrícola San Sebastián de Perquenco salieron en un bus PPU VG.2078-6, conducido por Benjamín Toledo Ibarra en dirección a la Reserva Malalcahuello por una invitación del INJUV, como faltaban cupos para completar el bus que los trasladaría se invitó a otros alumnos de dicho colegio, motivo por el cual los profesores a cargo de los estudiantes decidieron realizar el viaje por la ruta Victoria a Curacautín, atento a que debían pasar a un supermercado a adquirir especies para algunos de los educandos invitados, los estudiantes coinciden -como se dirá más adelante- que el bus iba a exceso de velocidad desde que veían el paisaje a través de las ventanas súper rápido, algunos alumnos hicieron notar que el conductor tenía los ojos rojos y una actitud de cansancio al momento de subir al bus. Estos hechos están debidamente acreditados, a juicio de los sentenciadores con las deposiciones de los testigos que el Ministerio Público hizo comparecer al juicio...”*

A continuación, en el mismo considerando que cita, el tribunal consigna la declaración de cada uno de los testigos presentados por la Fiscalía, como sigue: *“al efecto, Yaciara Maldonado González en lo pertinente señaló que hasta que pasaron al súper-mercado A Cuenta el bus no iba tan rápido, sin embargo cuando entraron al camino de dos*



pistas, ahí, iba rápido, afirma esto porque iba mirando los árboles del camino a través de la ventana, recuerda que primero entraron a una curva al lado izquierdo luego al lado derecho y en la última nos volcamos, solo habló con el conductor la profe Daniela, los alumnos que estaban atrás de la máquina decían que bajara la velocidad, no sabe si estas expresiones le llegaban al chofer dado que el bus era muy largo, no recuerda que el conductor haya frenado momentos antes de entrar a la curva, en este mismo orden René Calluán Reyes. En este mismo sentido están los dichos de Esteban Cayul Colicoy, en orden que, hicieron una parada en el súper-mercado A Cuenta, luego siguieron la ruta Victoria a Curacautín, el bus iba rápido, sus compañeros decían bajara la velocidad, igualmente la profe Daniela pero el conductor no la disminuyó. Se corroboran estos testimonios con lo afirmado por Patricio Poblete Sanhueza en el sentido que luego de pasar al súper-mercado A Cuenta conversaba con otros compañeros que el bus iba muy rápido pero prefirieron guardarse eso pero le hicieron llegar a la profe Daniela ese hecho, ella al chofer, después pasó lo que pasó...”

“En plena armonía con los dichos anteriores, Nicolás Cárdenas Neculhueque enfatizó que el INJUV trajo una propuesta de paseo al parque Malalcahuello, se fueron por una ruta propuesta por los profesores, el chofer del bus que nos transportaba Benjamín Toledo, acató la orden, rememoró que la profesora Labrín se paró y fue a decirle al conductor del bus bajara la velocidad lo que hizo en un momento pero después siguió igual, considera que a los veinte minutos ocurrió el accidente, afirmó que a la salida de Victoria comenzó a subir la velocidad, nos percatamos de ello por el movimiento que era notorio en las curvas.”

CUARTO: Sostiene el recurrente que, de la declaración de los testigos antes mencionados, especialmente del testimonio de don Nicolás Cárdenas Neculhueque, quien dijo haber visto a la profesora Daniela Labrín dirigirse al conductor del bus para advertirle que



disminuyera la velocidad, se desprende que el imputado tomó pleno conocimiento de la elevada velocidad a la conducía el bus y, aún así, persistió en su conducta, aceptando el resultado del hecho delictivo como consecuencia posible. No obstante ello, afirma el recurrente, el tribunal, sin respetar el principio de la razón suficiente, llegó a una conclusión distinta, ignorando y dejando de valorar dicha prueba.

QUINTO: Finalmente, señala el acusador, que el vicio de nulidad alegado y fundamentado, influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues el tribunal ha valorado la prueba testimonial con infracción del principio de la lógica de la razón suficiente, llegando a una conclusión que no encuentra correlato con la declaración de los testigos, lo que incide en la calificación jurídica, establecida por el tribunal.

SEXTO: Que, revisado el fallo impugnado, se observa que en su considerando duodécimo, el Tribunal se refiere al análisis de la prueba de cargo y, para desechar la teoría del caso de los acusadores, señala que: *“...no se pudo demostrar que el acusado hubiese tomado efectivo conocimiento de los reproches que diversos pasajeros hacían respecto del exceso de velocidad. Por el contrario, lo único acreditado a este respecto es que el conductor se encontraba separado del resto de los pasajeros por una puerta, según dichos de los propios testigos de cargo, y que estos últimos si bien reconocieron comentar entre ellos o con la profesora el exceso de velocidad, ninguno de ellos se dirigió al conductor para representarle tal situación, no compareciendo a estrados a declarar ninguno de los profesores tampoco, únicos que podrían haber aportado los antecedentes necesarios para tener por demostrada esta hipótesis fáctica.”* Tal conclusión es absolutamente propia y válida de un Tribunal de la instancia. Sin embargo, este Corte estima que la misma debía ir precedida de una explicación pormenorizada del por qué se arriba a dicho negativo corolario, el que, en el presente caso, no se divisa, puesto que solo se refiere a los testigos de cargo de manera genérica y, tras ello, realiza el juicio de valoración



de que se viene hablando, sin más. Así las cosas, se advierte que dichas expresiones utilizadas y conclusiones expuestas por el Tribunal, en relación con la prueba de cargo, no cumplen con el requisito de fundar la sentencia de la manera que lo exige la ley, esto es, de manera clara, lógica y completa, y de acuerdo a los límites que establece el citado artículo 297 del Código Procesal Penal.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, llama la atención de esta Corte que, en las conclusiones recién anotadas, los sentenciadores desatiendan los testimonios consignados por el propio Tribunal, en el considerando undécimo, motivo en el cual se recogen los testimonios de Yaciara Maldonado González, René Calluán Reyes, Esteban Cayún Colicoy, Patricio Poblete Sanhueza y Nicolás Cárdenas Neculhueque, de los cuales se desprende, claramente, que el conductor del bus si tomó conocimiento de los reclamos que hicieron los alumnos y la profesora Daniela Labrín, respecto de la elevada velocidad con que conducía el móvil, no obstante lo cual, continuó conduciendo de la misma forma.

OCTAVO: Que, de lo expuesto precedentemente, aparece que el Tribunal no analizó toda la prueba producida en el juicio, ni la valoró de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley. Entonces resulta evidente que las conclusiones a que llegan los sentenciadores no son consecuencia de un análisis pormenorizado de la prueba, sino que, como lo aseveran los acusadores, el resultado de una valoración en que no se ha respetado la regla de la lógica señalada. Como señala el recurrente, no existe razón suficiente para concluir que el acusado no tomó efectivo conocimiento de los reproches que los pasajeros le formularon, por el contrario, la conclusión lógica es que si lo hizo y, no obstante ello, persistió en su actuar.

NOVENO: Que resulta pertinente hacer presente, además, que el régimen de la sana crítica que contempla nuestra legislación penal, contiene, por un lado, la libertad de prueba y, por el otro, la libre valoración de la misma. Sin embargo, ello está sujeto a los límites que expresamente nos señala el legislador, cuales son los principios de la



lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Todo esto debe concretarse en la fundamentación de los fallos judiciales, en términos que estos guarden correspondencia con los extremos recién referidos. Sólo de esa forma se satisfacen los fines del proceso penal y se legitiman las decisiones judiciales, especialmente aquellas que se contienen en una sentencia definitiva, para ofrecer seguridad jurídica y paz social.

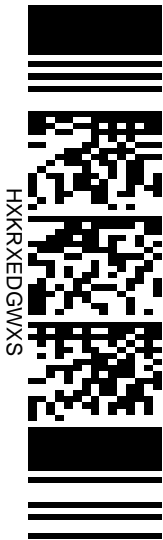
Para cumplir con la exigencia impuesta a los jueces de fundamentar sus decisiones judiciales y para que pueda reproducirse en forma clara y precisa la sentencia objeto del recurso que nos ocupa, se puede deducir que no se ha analizado adecuadamente el mérito de la prueba producida en el juicio, pues las conclusiones a que arriban los sentenciadores no están de acuerdo con tales exigencias, toda vez que no se contiene en ella una exposición clara, lógica y completa respecto de la valoración realizada a los distintos medios de prueba que sirvieron de sustento a sus conclusiones, lo que trae consigo que se perciba, además, una falta de la necesaria fundamentación de la sentencia.

DÉCIMO: Que, conforme se ha razonado, se acogerá el recurso de nulidad interpuesto por los acusadores, por la única causal alegada, como se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 360, 373, 375, 376 y 384 del Código Procesal Penal, **SE ACOGE** el recurso de nulidad deducido por el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Curacautín, don Iván Isla Amaro, adherido por los querellantes, en contra de la sentencia dictada con fecha 12 de diciembre de 2022, en causa RIT 116-2022, RUC 1901072463-8, del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Temuco, declarándose que respecto del imputado Benjamín Edmundo Toledo Ibarra la sentencia antes singularizada y, por consiguiente, el juicio, **SON NULOS**, debiendo procederse a la celebración de un nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado.



Redacción del abogado integrante Fernando Cartes Sepúlveda.
Regístrese y devuélvase.
Rol N° Penal-1145-2022 (pvb).



Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por su Presidenta Ministra Sra. María Georgina Gutiérrez Aravena, Ministro (S) Sr. Luis Olivares Apablaza y abogado integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda. Se deja constancia que la Ministra Sra. María Georgina Gutiérrez Aravena y el Ministro (S) Sr. Luis Olivares Apablaza, no firman la sentencia que antecede, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausentes.

En Temuco, a catorce de abril de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

